

EL DESAFUERO

El largo y difícil proceso de verdad y justicia con respecto a la dictadura más larga y cruenta de nuestra historia, ha dado –con el desafuero– un paso más. Las reacciones y encuestas en torno al asunto, dejan pendiente, sin embargo, la pregunta por la posibilidad de convertirnos verdaderamente en otro país. En un país en que la sociedad tenga la capacidad para procesar los acontecimientos de las últimas décadas, para dar vuelta la hoja en forma madura; vale decir, con memoria, con justicia y con autoconciencia histórica, y también con una democracia plena y profunda, que vaya más allá de un mero régimen civil de corte electoral.

Bernardo Subercaseaux

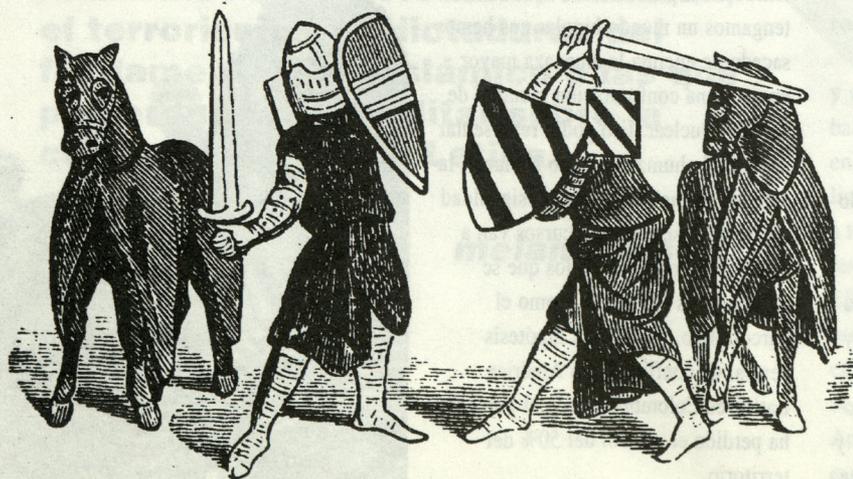
¿Es posible, aún, otro Chile?

Resulta preocupante que entre el 30 y 35% de los encuestados rechace el desafuero, demostrándose así partidarios de que Pinochet conserve hasta el fin de sus días todos sus privilegios y exenciones. ¿Cómo interpretar este porcentaje? ¿Significa acaso que por lo menos un 30% de la ciudadanía justifica la tortura y la violación brutal y sistemática de los derechos humanos ocurrida entre 1973 y 1989? ¿Significa acaso que en aras de la estabilidad y del bienestar económico, un sector importante de la población acepta el exilio de miles de chilenos y la supresión por años y años de los derechos civiles y de casi todas las libertades públicas? Si fuese así, ello implicaría que una parte considerable de la sociedad ha interiorizado la moral de la dictadura, la idea de que el fin justifica los medios, situación que resulta sumamente preocupante en términos de futuro, y constituye un caldo de cultivo para algunos de los grandes peligros que azotan al mundo contemporáneo: el narcotráfico, la delincuencia, el hedonismo «yoista», el tráfico de influencias y la corrupción.

Resulta preocupante también la reacción de las Fuerzas Armadas, sobre todo en relación a la mesa de diálogo. Casi todos los Comandantes en Jefe han señalado que el desafuero entorpece sus alcances y que por lo tanto se hará muy difícil –ante las nuevas circunstancias– obtener alguna información sobre los desaparecidos. En definitiva, una actitud muy distinta a la que era esperable: a la insistencia –desde el honor militar– en respetar el esfuerzo comprometido y sobre todo la palabra empeñada. Pensábamos que la voluntad militar no se amilanaba ante las dificultades. Retrospectivamente, entonces, esta actitud de los Comandantes en Jefe viene a corroborar que la participación en la mesa de diálogo de sus instituciones fue una suerte de manejo en pro del ex Dictador, y que el reconocimiento de la violación a los derechos humanos fue un paso táctico y no una reflexión madura, lo que por supuesto no ayuda al futuro del país.

Resulta preocupante también la reacción de la derecha, tanto política como empresarial. La derecha política, salvo excepciones, como Allamand y Lavín, ha reaccionado furibunda, denunciando que se trata de un fallo político; incluso algunos han hablado de un golpe de Estado judicial. La misma derecha, que siempre ha respetado y acatado los dictámenes de la Ilustrísima, habla ahora de ausencia de criterio jurídico y amenaza con condicionar todo su accionar político al fallo. Es verdad que en cierta medida esta actitud resultaba esperable, pues muchos de sus dirigentes y parlamentarios más conspicuos, como Sergio Fernández, Jovino Novoa, Carlos Bombal y Alberto Cardemil, entre otros, tuvieron cargos en el gobierno de Pinochet, y resulta poco creíble que no hayan tenido algún tipo de conocimiento o injerencia en las gravísimas violaciones a los derechos humanos que la justicia está investigando. Como quiera que sea, los hechos muestran que no tenemos ni una derecha política ni una clase empresarial mayoritariamente modernas y democráticas, lo que por cierto resulta poco alentador para el futuro del país.

Cabe, por lo tanto, volver a las inquietudes iniciales y a la pregunta que encabeza esta columna ¿Es posible, aún, otro Chile? ¿Podrán todas las voces y todas las caras recobrar su dignidad? ¿Su música interior? ¿Será posible, todavía, volver a ser un país pequeño, pero digno?



EL PROCESO QUE A PINOCHET

Manuel Antonio Garretón

La posibilidad de un futuro para Chile

Díamela Eltit

La disposición pinochetista

El desafuero de Pinochet vino a reparar una de las aristas más desafortunadas que han rodeado a los gobiernos de la transición como ha sido impulsar una política de desmemoria social y de insensibilidad frente al terrorismo de Estado ejecutado en el período militar. Este desafuero consigue reparar el hecho inaceptable y alucinante de haber reciclado al dictador al convertirlo en parlamentario vitalicio, lo que era, por decir lo menos, una broma cruel que el sistema se inflingía a sí mismo. Pero no sólo implicaba la caricaturización del Parlamento sino, además, el cargo solemne y vitalicio, significaba exculparlo abiertamente (de manera vitalicia) de cualquier responsabilidad en la crisis de derechos humanos del 73 al 88.

Se dice que el caso Pinochet es el efecto de la globalización. Su captura posoperatoria en Londres mundializaría no sólo las economías sino, además legislaturas. Así, las violaciones a los derechos humanos, formarían parte de un delito, más allá de los tiempos y los espacios locales.

Evidentemente habría que estudiar más a fondo estos supuestos, pero sí está más que claro que este desafuero es el efecto Londres. El desafuero no es el resultado de políticas internas, sino la respuesta a la exposición pública internacional del caso chileno. Un caso que se configuró como uno de los modelos más radicalmente crueles del continente. Pero este efecto Londres consiguió quebrar la inercia de la transición y poner en un espacio más coherente a la Concertación que además está encabezada actualmente por el progresista Presidente Lagos. Y también muestra a la derecha en un lugar muy nítido: su irrestricto apoyo a Pinochet.

Estamos ante una derecha pinochetista que abiertamente incluye a los empresarios quienes, además de acumular las grandes reservas de capitales del país, se permiten ideologizar sus ganancias mediante duras y constantes amenazas que comprometen la economía nacional. El descaro de los empresarios se suma a la histeria de los políticos UDI y RN que cada vez más, por su pinochetismo a ultranza, se presentan indiferenciados, unidos, únicamente defensores de la ley de amnistía, propulsores de una ley de punto final.

El desafuero de Pinochet permite clarificar los escenarios y los discursos públicos para pensar cuál es el estado social, cultural y político del país. Ya sabemos que el pinochetismo excede a Pinochet, se trata en realidad de una "disposición" en la que se anudan el capital y un modo autoritario de control de problemas y energías sociales.

En este sentido, el desafuero implica, a su vez, paradójicamente, la inserción programada de la "disposición" pinochetista en el interior de la vida pública nacional, esta vez sin máscaras y sin la extrema tolerancia y hasta complicidad de la Concertación en la proliferación del pinochetismo en la esfera pública.

Muy pronto deberemos constatar la explosión de esa "disposición" pinochetista en la candidatura edilicia de Joaquín Lavín. Resulta lamentable que la Concertación trivialice la elección y en vez de responder seriamente a Lavín con una candidatura solvente y responsable, lance a "La Martita" a competir como si se tratara de un concurso banal organizado por unas damas relativamente simpáticas, relativamente bien intencionadas.

La posibilidad de juzgar a Pinochet, abierta por el fallo de la Corte Suprema que lo desafuera y obliga a su juicio, es el hito más importante en la reconstrucción de nuestra comunidad nacional, junto al Plebiscito que pusiera fin al régimen militar, la Comisión Rettig, los juicios a algunos criminales. El fallo establece que hay sospechas fundadas de la participación de Pinochet, como autor, cómplice o encubridor, en algunos de los crímenes atroces cometidos por su dictadura.

Innumerables veces hemos sostenido que el juicio y castigo por los crímenes y violaciones sistemáticas de los derechos humanos bajo la dictadura, no son de ninguna manera un problema del pasado o algo fuera de las preocupaciones de la gente. Por el contrario, son el único problema grave que enfrenta Chile hacia el futuro: la posibilidad de existir como país, como comunidad política. Y, en este sentido, tanto la Mesa de Diálogo, con el reconocimiento implícito de su responsabilidad en estos crímenes, como el juicio a los culpables y responsables, partiendo por el máximo responsable que es Pinochet, permiten pensar por primera vez en serio y sin palabrerías en la reconciliación entre Fuerzas Armadas y sociedad. No hay reconciliación sin justicia y la justicia significa verdad, castigo y reparación. Lo único que podría reemplazar al castigo es el reconocimiento público y la solicitud de perdón por parte de las Fuerzas Armadas como institución, y de los responsables, autores directos y civiles que cooperaron en los crímenes.

Y no se puede seguir con la monserga del "contexto histórico". Ello equivale a decirle al pueblo judío que el holocausto se explica por el "contexto histórico". Tal contexto puede explicar las crisis políticas, donde hay variedad de responsabilidades. Y aquí hay que reconocer que sólo los sectores de izquierda que participan en la Concertación y, en parte importante, la Democracia Cristiana, han reconocido su responsabilidad en esta crisis. No ocurre lo mismo con la derecha que sólo ve responsabilidad en los otros. Pero una cosa es la responsabilidad en la crisis política de Chile y una cosa esencialmente distinta son los crímenes y el holocausto chileno, que sólo se distingue los crímenes nazis en la magnitud. No nos olvidemos que uno de los miembros de la Junta de Gobierno dijo que comunistas e izquierdistas no eran humanos sino "humanoides" y desde Pinochet para abajo proclamaron que no eran chilenos sino "antipatriotas". ¿Es muy distinto todo esto de la descalificación criminal que hiciera Hitler de los judíos?

El fallo de la Corte Suprema puede ser el inicio de un proceso que termine con la impunidad. Se trata del mismo poder del Estado que avaló esos mismos crímenes. Algo está cambiando. Y, por lo tanto, junto a la continuidad de los procesos que lleven a la justicia, lo que va quedando es el reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas y la derecha chilena, cuyos líderes actuales gritaban en plena dictadura "desaparecidos, ja, ja, ja", de los crímenes y violaciones de derechos humanos. Es muy probable que las Fuerzas Armadas hagan este reconocimiento antes que la derecha. Y ello, porque saben que su identidad y su futuro está atado a la historia de Chile y no a la dictadura. En cambio, estamos ante una derecha que es básicamente pinochetista y cuya identidad y poder se constituyeron bajo la dictadura, en la complicidad, encubrimiento y participación de los crímenes que hoy se busca juzgar.

Y si la justicia es condición indispensable de la reconstrucción moral y de la viabilidad del país como tal, el Estado no puede ser neutro frente a ello. No basta con que las instituciones funcionen, sino que es conveniente una señal respecto del contenido ético de dicho funcionamiento. Recordemos que el Estado de Chile es considerado por organismos internacionales de derechos humanos como permanente violador de éstos, en tanto no se anule, derogue o se deje de aplicar para siempre el decreto-ley de autoamnistía decretado por la dictadura de Pinochet.

Pablo Hunneus

El dedo en la llaga

Con el desafuero de Pinochet culmina el movimiento iniciado por la juventud de escasos recursos en 1983, cuando estudiantes y pobladores salen a protestar por justicia y libertad política.

Luego vino la Concertación de políticos profesionales, el plebiscito del ¡NO!, la conciencia internacional de Derechos Humanos, los 503 días de arresto en Londres, etc., o sea, todo un movimiento de rechazo a iniquidades de sangre cometidas por agentes del Estado, movimiento que culmina cuando la Corte Suprema le quita al general sus prerrogativas judiciales (mas no su millonaria dieta) de parlamentario.

Entretanto, la actitud de los poderes fácticos denota una cierta satisfacción, como diciendo: mientras el chivo expiatorio cargue con todas las culpas, vamos bien. Total, para eso está el capataz del fundo, para hacer el trabajo sucio sin enlodar al patrón.

Pero si en los años 80 era impensable un Pinochet preso ¿qué vendrá mañana que hoy nos parezca imposible? ¿José Yuraseck devolviendo la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) a Chile? ¿La repatriación de los dineros succionados hacia el exterior por la mafia financiera? ¿El ex presidente del FMI, Michel Camdessus, extraditado para dar cuenta del holocausto de pobreza en que sumió a Latinoamérica?

En eso estaba, cuando aparece en los noticiarios de TV una «funa». Definida por sus inventores como «una algarada festiva», la funa es un nuevo tipo de manifestación de gente joven contra personas libres de proceso formal, pero sindicadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ésta, que viene a ser la tercera en un año, fue contra un agente de la policía secreta llamado Germán Barriga, a quien las investigaciones informales acusan de haber asesinado a varios militantes del PS.

El aviso llega por Internet -alta tecnología en todo esto- y a la hora convenida unos trescientos estudiantes, junto a parientes de las víctimas, marchan sobre el domicilio particular del «funado» con sendas pancartas. No estaba Barriga en casa, o no quiso salir, pero el objetivo moral de denunciar a hechores ocultos se alcanza plenamente. ¿Cómo supieron quién era y dónde vive? El prontuario que distribuyen por E-mail impresiona por lo detallado, va desde el nombre de sus padres al puesto que le dan en mayo de 1993 en Codelco al pasar a retiro con el grado de coronel, además, por cierto, de la historia de cada víctima que le enrostran.

O sea, las protestas de hoy no son los enfrentamientos callejeros de antes. Del puño en alto se ha pasado al dedo sobre el teclado y del grito a todo pulmón a formar un verdadero DICOM de la perversidad. Y al ir más allá de la figura símbolo se llega al móvil profundo de la dictadura, vale decir a los que se enriquecieron con ella. Porque si torturaron, violaron y asesinaron fue para algo, y esa finalidad última no es otra que permitirle a una nueva clase acumular dinero.

Van a sus chequeras maestranzas de ferrocarriles, la Línea Aérea Nacional, generadoras de electricidad, CAP, fondos de pensiones, bosques fiscales, tierras mapuches y más de tres mil millones de dólares en plata para el bolsillo que en 1983 se llevaron los grupos financieros «pirañas» sin que nadie pudiera levantar la voz. Encima, la vida en jauja para las cúpulas de poder gracias a préstamos que forman la mayor deuda externa de la historia, y que hoy paga la gente con impuestos directos (IVA) al pan, intereses usurarios y recesión.

Las subrepticias «privatizaciones» de recursos públicos terminaron más que nada beneficiando a quienes el propio Pinochet llamó sus «amores pagados». A cada duque debió obsequiarle algún feudo, salitrera o empresa fiscal con su correspondiente permiso para despedir trabajadores. Miles y miles de familias atormentadas por la cesantía; llegando a ser tantos o más los exiliados económicos que los perseguidos a causa de haber integrado tal o cual partido.

Así todo, hasta socialistas «renovados» aceptan gustosos directorios en las empresas arrebatadas, y siguen pasando a domicilio extranjero servicios tan básicos como las carreteras y el agua potable.

¿Quién se atreve a robarle huevos al águila? Los poderes surgidos de expropiarle capital a la comunidad se van a resistir a lo que viene; altera nada menos que el sagrado orden gracias al cual un dilicto 2% de los chilenos acapara, según datos del INE, la mitad del ingreso nacional. «Funados» por pobladores que los miran fijo, intervenidas sus cuentas, y expuestos sus negociados, recordarán con nostalgia cuando su encargado acumulaba por ellos toda la inquina.

Por eso, remover tierra en busca de desaparecidos es una cosa, pero escarbar cuentas de Zurich o Miami en busca de patrimonio fiscal es meter el dedo en la llaga.



REFLEXION
y liberación

Revista Ecueménica y Pluralista abierta al Pensamiento Cristiano Liberador en América Latina

PARA UN COMPROMISO Y PRAXIS POR LOS POSTULADOS DEL CONCILIO VATICANO II Y LA JUSTICIA SOCIAL, ANALIZAMOS TEMAS DESDE LA TEOLOGÍA, ECONOMÍA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Lea y Difunda "Reflexión y Liberación"

Suscripciones: FonoFax: 64 11 476 / Email: reflexilib@hotmail.com
Santiago - Chile

LE MONDE
diplomatique
una voz distinta en medio del ruido

Ahora en Chile
adquiéralo en todos los quioscos del país
N° 1 Septiembre 2000

Globalización y países en desarrollo

Por Ignacio Ramonet
El enigma Chávez

Por Gabriel García Márquez
Estados Unidos, un Estado ilegal

Por Noam Chomsky
Los zoológicos humanos de la República colonial Francesa.

Por N. Bancel, P. Blanchard y S. Lemaire
Como nació el mito de internet

Por Armand Mattelart
Doctor... no puedo dormir

Por Eduardo Galeano
Dossier: Los Paraísos Fiscales

¡Suscríbese!

Llame al fono: 671 75 54 Fax: 671 76 80
Huérfanos 1022 of. 1408 Santiago - Chile

septiembre 2000
38
Rocinante

METASTASI

EL PROCESO QUE LE FALTA A PINOCHET

hernán millas



Vaya que tiene motivos Enrique Silva Cimma para apreciar y juzgar a Presidentes. Desde la Contraloría conoció a Juan Antonio Ríos y Gabriel González (ya entonces era subcontralor), y después, como Contralor, debió tratar directamente con Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Además, como titular del Tribunal Constitucional tuvo que enfrentar los turbulentos mil días de Salvador Allende.

Su balance moral lo entrega en su libro *Memorias Privadas de un Hombre Público*: “qué satisfacción profunda siento –dice– al afirmar categóricamente: no conocí un solo Jefe de Estado que terminara enriquecido en su mandato”.

Al margen de sus aciertos o desaciertos de gobernantes, todos se fueron con sus mismos haberes. Ibáñez pasó sus últimos días en su vieja casa de Dublé Almeida, en Ñuñoa; Alessandri, en su departamento frente a la Plaza de Armas y en su chacra en Malloco; Frei padre, en su casa de calle Hindenburg y que adquiriera por una Caja de Previsión, recién casado; Allende sólo dejó su vivienda pareada en calle Guardia Vieja.

Silva Cimma recuerda que, en una visita que hizo a Alessandri, el mandatario tuvo dificultad para leer un documento con sus anteojos, y dijo que tenía que cambiarlos. “Me extrañó –cuenta– que teniendo tantos amigos médicos no hubiera consultado ya a alguno”. “Es que todo cuesta plata, hombre”, fue su respuesta. “Y como usted me tiene con un sueldo de hambre...”.

En el siglo anterior, tampoco se enriqueció en el cargo José Joaquín Pérez. Cuando terminó su mandato tomó un tranvía para irse a su casa. Aún como Presidente, Aníbal Pinto –bajo cuyo gobierno se libró la Guerra del Pacífico– salió de La Moneda tan pobre que debió aceptar el ofrecimiento de su amigo Juan Pablo Urzúa, dueño del diario *El Ferrocarril*, para que hiciera la traducción del francés del folletín, un novelón que los periódicos publicaban en primera página. Al almirante Jorge Montt, cuya Junta derribó a Balmaceda, hubo que comprarle una casa por suscripción popular cuando dejó La Moneda.

La galería presidencial de Silva Cimma se detiene en 1973. Él, como prototipo del severo administrador público, famoso por no tomar razón de decretos que estimaba no se ceñían a la ley, debe serle doloroso constatar que la historia de Chile tendrá que consignar a un gobernante como émulo, en el aspecto moral, a un Trujillo, un Pérez Jiménez, un Somoza, un Stroessner, un Duvalier, citados en el continente por llegar a la casa de gobierno con un mano por delante y otra por atrás, y alcanzar la condición de potentados económicos.

Algo se echó de menos en el desafuero a Pinochet. Aún falta el proceso por supuesta corrupción y enriquecimiento ilícito. En estos días en que el alcalde de Calama es encarcelado en una demanda por supuesto estiramiento de manos, y que podría alcanzar a los cien millones de pesos –unos 200 mil dólares– cabe preguntarse por qué no se investiga cómo el general, sin haber recibido ninguna

herencia, que se sepa, puede hoy en día tener una fortuna que, en un inventario cicatero, alcanza a los cinco millones de dólares.

En la discusión del proyecto para disminuir la evasión de impuestos, se señala que

ese Servicio constantemente está citando a contribuyentes que adquieren bienes que no corresponden a las entradas que han declarado. La afirmación del director de Impuestos Internos no parece haberse hecho efectiva en cuanto a los bienes del Capitán General. ¿O existe una disposición secreta que impide investigarlo, y lo deja al margen del resto de los chilenos?

Es cuestión de acudir a la declaración que Pinochet formula, en octubre de 1973, a los corresponsales extranjeros. Les dice que los miembros de la Junta harán una declaración de sus bienes “para que la historia diga que llegamos y nos vamos con lo poco que teníamos, pues los miembros de las Fuerzas Armadas nunca hemos sido gente de bienes”. Pinochet les confesaba su caso: “he vivido en casa que el Ejército me ha proporcionado en las ciudades donde me ha destinado”. ¿Los miembros de la Junta hicieron esa declaración o fue sólo una de las tantas fanfarronadas del dictador?

Señor Director de Impuestos Internos: Cite al contribuyente Augusto Pinochet Ugarte para que explique cómo, con su sueldo de Comandante en Jefe del Ejército y de Presidente de la República, se hizo de los siguientes bienes:

- Propiedad de El Melocotón: 600 metros cuadrados, con piscina temperada, cancha de tenis, y una sala de cine.
- Mansión en La Dehesa, calle Los Flamencos.
- Residencia en Iquique, en Costa Brava.
- Residencia en Reñaca Alto.
- Un piso de oficinas en Valparaíso, con seis estacionamientos.
- Propiedad en Playa La Lisera, Arica.
- Propiedad en calle Málaga 322, Las Condes, destinada a oficinas.
- Propiedad de Los Boldos, comuna de Santo Domingo. Se trata de una parcela de 51 hectáreas con una casa principal de 720 metros cuadrados construidos. Tiene –aparte de los dormitorios y dependencias para alojados– un cine, una biblioteca, un bar, un gimnasio y una sala de juegos. Además, la casa está dotada de un bunker subterráneo.

No se consideran las casas que se levantaron sus hijas Verónica y Jacqueline, en el mismo predio, en la hectárea que el general le regaló a cada hijo. En este inventario tampoco se consignan los depósitos en los bancos nacionales y extranjeros.

¿Hay quien se atreva a solicitar la investigación del caso? Un bonito desafío para la pareja parlamentaria Pérez y Pérez, que tiene el noble propósito de sanear los negocios públicos. Y, además, una excelente oportunidad para que Pinochet demuestre su honestidad. Quién sabe si un lejano Pinochet francés le dejó una elevada herencia.